

Las dimensiones sociales de la economía verde

Los cambios económicos, tecnológicos e institucionales que actualmente conforman la base de las estrategias de economía verde corren el riesgo de reforzar la inseguridad y las desigualdades entre los seres humanos. Un número creciente de datos hablan de diversas consecuencias sociales y apuntan hacia elementos clave de enfoques alternativos que pueden promover la combinación de los objetivos sociales, económicos y ambientales del desarrollo sostenible.

Planteamiento del problema

A raíz de la triple crisis de años recientes (en los sectores de la alimentación, la energía y las finanzas) y en el período precedente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20), el concepto de la economía verde ha venido a ocupar el centro del escenario en los círculos de desarrollo internacional. Término acuñado para llamar la atención hacia la falta de integración de las los intereses ambientales en la política económica desde la Cumbre de la Tierra en 1992, tanto el concepto mismo de economía verde como las estrategias que se proponen para promoverla han sido fuertemente cuestionados. Existe un consenso considerablemente amplio sobre la necesidad de cambiar de los sistemas de altas emisiones de carbono hacia otros con bajas emisiones y transformar los patrones de inversión, producción y consumo de forma que estos conduzcan hacia el desarrollo sostenible. Pero existen diversos caminos que desembocan en la economía verde; y cada uno de ellos entraña diferencias en cuanto a costos y beneficios para los distintos grupos sociales, países y regiones, así como diferentes funciones y responsabilidades para los actores y las instituciones del Estado, el mercado y la comunidad.

Al vincular explícitamente a la economía verde con los objetivos del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, el proceso de Rio+20 ha orientado la atención hacia la importancia de las dimensiones sociales del desarrollo. No obstante, las dimensiones sociales de la economía verde, y la forma de poder abordarlas, sigue siendo un asunto sin resolver. En varios estudios de las Naciones Unidas se ha comenzado a examinar estos aspectos.

Una investigación de UNRISD examinó los puntos siguientes:

- Cómo las iniciativas y estrategias de economía verde afectan a los distintos grupos sociales y patrones de desigualdad;
- Cómo pueden las transiciones hacia la economía verde contribuir a lograr los objetivos sociales inherentes al concepto de desarrollo sostenible;
- Qué valores, conocimiento, prioridades e intereses están definiendo el concepto y las políticas de economía verde;
- El papel de la política social, la regulación, la participación y la acción colectiva en la promoción de la economía verde y justa
- Cómo aprovechar el potencial de la miríada de sistemas de subsistencia y producción a nivel local que se ocupan de los objetivos económicos, sociales y ambientales del desarrollo sostenible.

Resultados de la investigación

Evitar una “triple injusticia”

Los grupos y las poblaciones que probablemente resulten más afectados por el cambio climático son los menos responsables de causarlo y los de recursos más limitados para enfrentar sus consecuencias. Esta “doble injusticia” se hace triple cuando los costos de la transición hacia la economía verde afectan negativamente a los grupos de bajos ingresos y otros sectores vulnerables. La investigación permitió revelar varios casos y contextos donde se ha presentado esta situación:

- El desplazamiento de personas o de la producción de cultivos alimenticios (Brasil, India, Indonesia) para abrir paso a la producción de biocombustibles, que están promoviéndose como fuente alternativa de energía con bajas emisiones de carbono;

Recuadro 1: Investigación de UNRISD sobre las dimensiones sociales de la economía verde y el desarrollo sostenible

A principios de 2011, el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) inició una investigación, con la participación de cerca de 50 investigadores, cuyo objetivo era aclarar y posicionar las dimensiones sociales de la economía verde y el desarrollo sostenible en un plano más destacado de los análisis y los debates de políticas. Las actividades de UNRISD comenzaron con una solicitud de documentos que produjo más de 300 trabajos, seguida de la “Conferencia sobre economía verde y desarrollo sostenible: Reincorporar la dimensión social”, que tuvo lugar en Ginebra los días 10 y 11 de octubre de 2011. Con la asistencia de cerca de 250 personas, la conferencia reunió a investigadores académicos, formuladores de políticas de las Naciones Unidas, funcionarios de gobierno, representantes de la sociedad civil y activistas de todo el mundo.

Esta investigación ha generado hasta ahora una serie de productos, como la serie de artículos de opinión en los cuales los investigadores comparten sus ideas y perspectivas; “Greening the Economy” (número especial de la revista *Development* elaborado en colaboración con la Sociedad Internacional para el Desarrollo); una serie de diez documentos ocasionales; y seis videos cortos sobre dimensiones sociales clave de la economía verde. UNRISD también ha participado en varios procesos y redes de conocimiento de las Naciones Unidas para examinar la relación entre la economía verde, el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en preparación para la conferencia Rio+20 (www.unrisd.org/greeneconomy).



- Políticas energéticas que aumentan las tarifas de los consumidores domésticos (Reino Unido y otros países industrializados avanzados), que son regresivas porque la energía absorbe una porción mucho mayor del gasto en los hogares de bajos ingresos;
- Una estricta conservación de los sumideros de carbono y otras áreas (Australia), lo cual no solo reduce las oportunidades de subsistencia de los pueblos indígenas sino que además no toma en cuenta los sistemas culturales que siempre han respetado la naturaleza
- Un sesgo favorable al hombre en los mercados laborales y las instituciones de gobernanza, que excluye a la mujer de participar en sectores emergentes de la economía verde.

Los enfoques centrados en el mercado pueden arrojar resultados sociales contradictorios

Las iniciativas de “vender naturaleza para salvarla” —por ejemplo, por medio del intercambio de derechos de emisión de carbono y programas como PES y REDD— pueden resultar sumamente problemáticas desde el punto de vista social. Por ejemplo:

- Los esquemas PES que asignan derechos de propiedad privada sobre lo que hasta ahora eran recursos de propiedad común o del Estado a menudo favorecen o se inclinan hacia los más pudientes;
- Los enfoques de conservación que priorizan la eficiencia por encima de la equidad socavan los esfuerzos como REDD+ por obtener cobeneficios vinculados a la protección del ambiente y el bienestar humano;
- La asignación de un valor monetario a los bienes ambientales sobre la base del mercado tiende a redistribuir dichos bienes hacia arriba y, en consecuencia, a favorecer a las personas y los lugares con el mayor poder adquisitivo;
- Los programas como PES o REDD+, sumados a los incentivos para producir biocombustibles, a menudo entrañan concesiones y arreglos con los sectores de la pequeña agricultura, la biodiversidad, la subsistencia y la seguridad alimentaria;
- Los enfoques basados en el mercado a menudo entregan el timón del cambio a los intereses corporativos, lo que a su vez puede limitar el alcance de la reforma de las regulaciones y políticas que conducirían hacia el desarrollo social y sostenible.

Comodificar la naturaleza también presupone una conmensurabilidad universal de sus valores, lo cual no toma en cuenta la forma en que estos difieren de un lugar a otro, así como en cuanto al significado, la identidad y el uso de los bienes y servicios ambientales. Por otra parte, los precios de mercado no reflejan la totalidad de los costos sociales de la producción y reproducción, lo cual genera situaciones en las cuales las prácticas de gestión de los recursos naturales de los

Recuadro 2: Género y derecho a la tenencia de la tierra en Sudáfrica

En la provincia de Limpopo, en Sudáfrica, la economía verde se entiende como una oportunidad para enfrentar los problemas de la pobreza y el desempleo. Pero la falta de acceso al derecho a la tenencia de la tierra es un problema que debe resolverse para atraer nuevos participantes —en especial mujeres pobres y marginadas— a la agricultura. Esta situación se hizo obvia con el proyecto Incubador Mapfura Makhura (MMI), por el cual los pequeños agricultores se convertirían en productores de biocombustibles. Si bien el proyecto buscaba alcanzar un equilibrio de género, apenas 30% de los participantes en la fase piloto eran mujeres. Entre los problemas de mayor peso destacaron la deficiencia de los flujos de información y la baja proporción de mujeres que poseen tierra, requisito para ser incluido en el proyecto.

Fuente: Musyoki 2012.

pueblos rurales o indígenas pueden, de hecho, subvencionar a grupos sociales más ricos.

Los límites y las contradicciones del enfoque liberal de mercado hacia la economía verde indica la necesidad de promover otras aproximaciones institucionales o de economía social para una economía tanto verde como justa. Estas enfatizan, respectivamente, las reformas macroeconómicas, de gobernanza y regulatorias, así como modelos que integren aun más la gestión de los recursos naturales y el desarrollo local.

El problema de la desigualdad no debe pasarse por alto

Si bien la comunidad de desarrollo internacional ha vinculado la economía verde con la reducción de la pobreza, se ha prestado mucho menos atención a la cuestión de la desigualdad, a pesar de que las desigualdades asociadas al ingreso y la riqueza, el poder, la etnicidad y el género son fundamentales para determinar cómo el cambio climático y la economía verde afectarán a las personas, su capacidad de respuesta y el espacio disponible para la adopción de soluciones políticas favorables a los pobres basadas en el consenso y las soluciones negociadas.

La desigualdad es importante porque:

- Las desigualdades de poder y el acceso o control de los recursos naturales determinan la exposición al riesgo y los niveles de vulnerabilidad y resiliencia;
- La capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de empleo y de otra índole asociadas a la economía verde, así como para cambiar sus patrones de consumo, mantiene una correlación con la desigualdad
- Las grandes desigualdades de ingreso erosionan la solidaridad social que se requiere para poner en marcha una política pública activa y pactos sociales que permitan enfrentar los grandes retos como el cambio climático y la reducción de la pobreza.

La inclusión de la importancia de la desigualdad como factor preponderante sirve para destacar los límites de promover la economía verde a través de soluciones tecnológicas, reformas institucionales minimalistas y enfoques restringidos sobre la protección social, y pone sobre el tapete los problemas de política social integral, regulación y participación efectiva que se analizan más adelante.

Las políticas sociales son herramientas clave para lograr una economía verde y justa

Las políticas sociales pueden cumplir múltiples funciones en toda economía, entre ellas las de protección, redistribución, formación de capital humano y reproducción social. La atención que se presta actualmente a la política social en los debates sobre la economía verde se centra principalmente en la protección o compensación de los sectores vulnerables y en la (re)capacitación asociada a la reestructuración industrial y los empleos verdes. Existen otros papeles para la política social que merecen atención, como se describe a continuación.

- La regulación del mercado laboral en pro de un “trabajo decente”. La investigación sobre el auge de la industria fotovoltaica en Bangladesh apunta a la necesidad de prestar atención no solo al número de empleos creados sino también a la calidad de los trabajos y las condiciones laborales.
- Políticas redistributivas. Una investigación sobre los países de la OCDE muestra que será necesario realizar cambios sustanciales a la política fiscal para reducir al mínimo los efectos socialmente regresivos de una asignación adecuada de precios para el carbono

(que se refleja en un aumento de las facturas de energía) y alentar el consumo verde. También se requerirá un incremento considerable de las “inversiones ecosociales” para adaptar la infraestructura de vivienda y desarrollar el transporte público. En muchos países en desarrollo, la redistribución de la tierra y la seguridad de los derechos de tenencia para los grupos desfavorecidos pueden ser un prerrequisito esencial para participar en iniciativas de economía verde (recuadro 2).

- La reproducción social y la atención: La capacidad de la mujer para realizar trabajos o proyectos en la economía verde se ve limitada por las múltiples tareas relacionadas con el cuidado de la familia y otras responsabilidades hogareñas. La política social (más allá de la protección social) puede cumplir un papel importante en el alivio de las cargas de la reproducción social, al tiempo que contribuye con el empoderamiento, la equidad y la cohesión social.

Identificar a los ganadores y perdedores de la regulación ambiental

¿Quién, a final de cuentas, asume los costos de las regulaciones y normas ambientales? Desde hace ya mucho tiempo se ha reconocido que la estricta conservación de los bosques sumideros de carbono y otros hábitat naturales similares ha entrañado concesiones innecesarias e injustas que afectan el bienestar de los pueblos indígenas y otras poblaciones de los países en desarrollo que bien dependen de los recursos forestales o pertenecen a culturas que han desarrollado sistemas de subsistencia que respetan la naturaleza. Como se observa en la investigación sobre la península Cape York de Australia, estos problemas pueden ser igualmente pertinentes en los países desarrollados. En este caso, representan una obstáculo de envergadura para el desarrollo de los esquemas PES y la participación de los pueblos indígenas.

Las entidades privadas o de múltiples interesados están fijando cada vez más normas ambientales, sociales y de gobernanza. Estas iniciativas pueden colmar las lagunas regulatorias que han surgido con la globalización y en contextos donde la capacidad regulatoria del Estado ha sido reducida o se ha visto constreñida por las reglas del comercio mundial. Pero estas normas enfrentan importantes limitaciones:

- Acaparamiento por parte de los intereses comerciales;
- Restricción de las formas de participación de las partes interesadas en las estructuras de gobernanza;
- Procedimientos deficientes para garantizar el cumplimiento de las normas;
- Tendencia a excluir forzosamente a las empresas y los productores pequeños de las cadenas mundiales de suministro
- Seguimiento y evaluación limitados de las repercusiones reales.

Los esquemas de normas pueden también ser muy selectivos a la hora de definir qué normas importan. Se han expresado inquietudes ante ciertas iniciativas “sostenibles” relacionadas con el aceite de palma que, por ejemplo, no toman en cuenta el problema del desmonte de las tierras y el desplazamiento de las poblaciones. Una investigación sobre un proyecto hidráulico en Honduras revela que la ejecución de esquemas basados en normas y sus beneficiarios directos pueden ser determinados más por la capacidad de los diferentes intereses locales para oponerse y negociar que por la propia capacidad técnica.

La coherencia de las políticas va más allá de la coordinación de estas

El reconocimiento de las contradicciones ambientales y sociales del crecimiento con altas emisiones de carbono, o el “más de lo mismo”,

está haciendo que se preste una mayor atención a la necesidad de lograr la coherencia entre las políticas, lo que implica que las distintas políticas (macroeconómicas, industriales, ambientales y sociales) se coordinan mejor y trabajan en sinergia hacia el desarrollo sostenible. En la investigación del Brasil y Ecuador se observa cierto progreso en la reconfiguración de los senderos de desarrollo de forma de apoyar la conservación, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico. Como ejemplos cabría mencionar los esquemas brasileños que integran a los pequeños propietarios a la producción de biocombustible o que condicionan la transferencia directa de dinero a la provisión de servicios ambientales. Sin embargo, una investigación realizada en la India (especialmente en el estado de Sikkim) ilustra las contradicciones existentes en contextos donde las políticas y los proyectos asociados a un rápido crecimiento económico y desarrollo infraestructural contradicen el discurso emergente sobre el desarrollo sostenible y crean graves problemas ambientales y socioculturales.

La coherencia se interpreta a menudo de forma restringida para hablar solo de una mejor coordinación de ciertas políticas e instituciones sectoriales. Pero la coherencia de las políticas también debe abarcar otras dos dimensiones: una gobernanza coordinada y sinérgica a múltiples niveles (internacional, regional, nacional, subnacional y local) y entre múltiples actores e instituciones (Estado, mercado, sociedad civil y comunidad). La investigación realizada en el Reino Unido sobre comunidades en transición revela instancias en las cuales los gobiernos han promovido la ciudadanía activa, a través de un marco descentralizado para la participación comunitaria y coaliciones de múltiples actores combinadas con incentivos al consumo verde. Esto ha aumentado el acceso y la generación de recursos financieros para políticas de cambio climático pertinentes a nivel local. Una mezcla similar de políticas podría vincular objetivos sectoriales en Sudáfrica, Mozambique y Angola.

La gobernanza es el resultado de la colaboración y la contestación

La colaboración entre múltiples actores (Estado, sector privado, sociedad civil, actores comunitarios e instituciones) es esencial para generar la voluntad política y llevar la economía verde a la práctica. Las coaliciones son fundamentales para movilizar el apoyo político que se necesita para reconfigurar las fuerzas que actualmente favorecen la actitud de que las cosas sigan como siempre, como los intereses en el sector de los combustibles fósiles, la agricultura con altas emisiones de carbono o los monocultivos convencionales para biocombustibles. A nivel de los proyectos y programas de economía verde, las colaboraciones entre múltiples actores facilitan la movilización de recursos, la mancomunidad de competencias y el aseguramiento de complementariedades y sinergias que de otra forma no existirían.

Pero las “alianzas” que trabajan en pro de una economía verde y justa podrían no conformarse a las relaciones armoniosas que generalmente se supone existen en el discurso mundial sobre las alianzas público-privadas. En efecto, un análisis antropológico de proyectos de protección de los bosques y agroecología en el Brasil indica que la contestación y negociación en curso entre los diferentes actores de un proyecto no son meras características de la relación sino un elemento clave del éxito del esfuerzo. Estas tensiones o “conflictos de interés” pueden garantizar que distintos bienes y competencias, o distintos tipos de capital—natural, económico, social y humano— se unan de forma complementaria.

La participación es la mezcla a partes iguales de la organización y negociación colectivas y la consulta

Si bien el discurso de la economía verde reconoce la necesidad de que haya participación, el diseño y la ejecución de un proyecto siguen obedeciendo en su mayor parte a un enfoque de arriba hacia abajo (top-down). Investigaciones realizadas en el Brasil, Malasia y Sudáfrica muestran que el diálogo con las poblaciones locales afectadas por proyectos de economía verde es un elemento clave para asegurarse de que las intervenciones externas se asuman y apropien como locales. Una investigación sobre la forma en que temas sociales como la reducción de la pobreza, la equidad y la justicia social se integran a la estructura de REDD+ revela la importancia de contar con regulaciones nacionales y una infraestructura institucional que reconozca e incorpore a las comunidades locales.

La participación equivale en la práctica a la celebración de consultas con determinadas partes interesadas cuya influencia real sobre el proceso de políticas puede ser baladí. La participación debe entenderse en términos mucho más amplios en cuanto a los esfuerzos organizados de los grupos socialmente desfavorecidos por ganar control sobre los recursos y las instituciones regulatorias (tanto del Estado como del mercado) que afectan sus vidas. En ese sentido, la participación va mucho más allá de las consultas para llegar hasta el empoderamiento y ganar influencia y beneficios por medio de la organización colectiva, la contestación, la negociación, el aprendizaje y el fortalecimiento de capacidad. Estos aspectos resultaron clave en, por ejemplo, la Sociedad de Desarrollo Deccan en la India, la iniciativa Yasuni-ITT en Ecuador (alternativa a REDD+ apoyada por el gobierno), la Bolsa Floresta en el Brasil, la Vía Campesina en América Latina y África, y algunos esquemas de comercio justo para promover las prácticas agroecológicas.

Los enfoques basados en las comunidades deben alimentar las políticas y apoyarse en ellas

Existen numerosos ejemplos de sistemas de subsistencia y gestión de los recursos naturales basados en las comunidades que dan fe del potencial de las experiencias locales que, de forma simultánea, abordan múltiples objetivos de desarrollo vinculados a la protección social, el empoderamiento económico y político, la identidad cultural y la integridad del ambiente (recuadro 3). Los conocimientos y las prácticas tradicionales de los pequeños agricultores, los pescadores, los pueblos indígenas y los moradores de los bosques son esenciales para delinear senderos de transición que conduzcan hacia el desarrollo sostenible. Estas experiencias ameritan un reconocimiento mucho mayor y deben recibir un respaldo más serio por parte de los responsables de las políticas.

Recuadro 3: Desarrollo local integrado en Brasil

“Araçuai Sustentável (Araçuai Sostenible)”, un proyecto popular de educación y agroecología en un municipio en el estado de Minas Gerais, Brasil, tiene como objetivo revertir la degradación ambiental y luchar contra la pobreza por medio del fortalecimiento de la conservación y agricultura en la economía local. El éxito del proyecto se basa en la valorización de los recursos disponibles en la comunidad y no en los que se carecen—un enfoque muy diferente de las agencias gubernamentales y de asistencia—así como la integración de políticas económicas, ambientales y sociales a nivel local. Este proceso consiste en combinar los recursos y competencias de múltiples actores e instituciones (gobiernos federales y municipales, la sociedad civil y la comunidad).

Source: Rival 2012.

Pero el apoyo externo a las iniciativas o movimientos comunitarios locales —ya sea del Estado, el sector privado o las ONG— debe evaluarse de forma crítica para evitar la absorción, la dependencia de la asistencia y la burocratización. Las iniciativas locales a menudo permanecen aisladas y no crecen debido a que carecen de un entorno jurídico, de políticas y de mercado facilitador. En efecto, la producción agrícola de los pequeños propietarios se ve a menudo marginada de forma sistemática en razón de los sesgos de política asociados al ajuste estructural, la orientación a la exportación, las importaciones de alimentos baratos y los subsidios y servicios de apoyo que favorecen a la gran agricultura comercial.

La contribución de las iniciativas comunitarias al bienestar social y el desarrollo económico depende en gran medida de si los productores pueden agregar valor a los bienes primarios. Actualmente, varios esquemas de “cobeneficio” (por ejemplo, proyectos de biocombustibles dirigidos a pequeños agricultores, o el comercio justo) a menudo restringen a los pequeños productores al papel de proveedores de bienes con bajo valor agregado y les integran a cadenas de valor donde otros actores de mercado se adueñan del grueso de los beneficios. Los productores locales pueden tener un espacio mayor para agregar valor cuando producen para el mercado local o interno.

El activismo necesita arraigarse localmente y conectarse internacionalmente

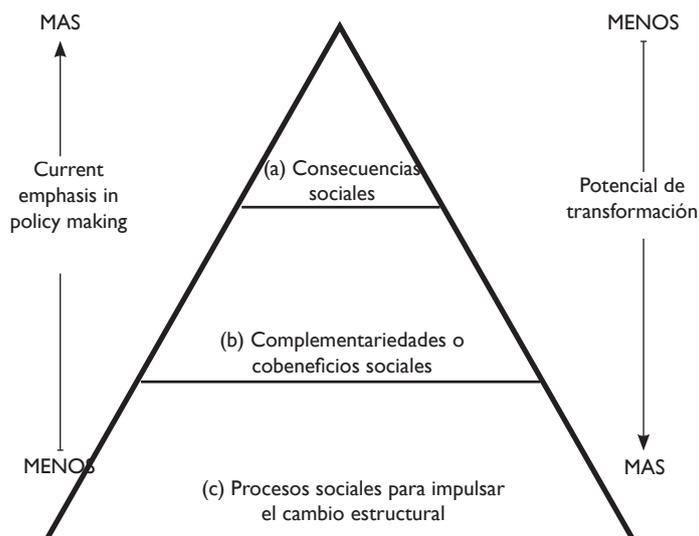
El activismo local, nacional y mundial tiene una función crucial que cumplir en cuanto a la definición del marco de opinión pública y las políticas. La movilización colectiva también es necesaria para oponerse a las fuerzas institucionales, normas y valores actuales que reproducen muchas prácticas insostenibles. Los movimientos que defienden el derecho a la tierra o la soberanía alimentaria, como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en el Brasil, Ekta Parishad en la India y, a nivel internacional, Vía Campesina, así como, en términos más generales, aquellos que abogan por el comercio ético, la protección de la selva pluvial tropical, la gestión de los recursos hídricos y la justicia climática, no solo actúan de forma individual, sino que también añan fuerzas en redes que facilitan el aprendizaje, la contestación y la negociación.

Sin embargo, la investigación muestra las trampas de idealizar este tipo de movimientos. Además de las debilidades internas, su influencia es insignificante ante la de intereses más poderosos. A menudo es fundamental hallar aliados a múltiples niveles de las estructuras de gobierno. Si bien ha resultado difícil forjar un movimiento de justicia climática a nivel mundial, la investigación indica que existe un potencial considerable de hacerlo desde las bases (bottom-up), por medio de movimientos arraigados en las luchas de las comunidades locales y que conectan sus luchas, tanto analítica como organizativamente, a temas y grupos más amplios. Los movimientos y las coaliciones sociales con arraigo del Sur tienen una gran capacidad para participar en la acción política a múltiples niveles, pero el principal reto es ampliar su lucha más allá de su base actual.

Lecciones de política

Cambiar el foco de las políticas hacia una economía verde social

El enfocar la economía verde a través de un lente social no solo revela una gama de temas que los investigadores, activistas y entes normativos deben abordar; también resalta los grandes desequilibrios presentes en la orientación de las políticas. Las políticas que tratan

Figura 1: La paradoja de las políticas

de las dimensiones sociales se concentran, a menudo y en primer lugar, en cuestiones relacionadas con la protección y la compensación de aquellos adversamente afectados por ciertos procesos de cambio y, luego, en obtener cobeneficios (por ejemplo, empleos verdes o agroecología) asociados a las distintas esferas económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible. Una tercera área de intervención de política relacionada con los derechos, la regulación y la participación (aspecto fundamental para una transformación estructural compatible con el desarrollo sostenible) recibe menos atención (figura 1). Este desequilibrio debe corregirse si pretendemos que la economía verde conduzca hacia un desarrollo sostenible y equitativo.

Las evidencias analizadas en este resumen dejan ver que las políticas para un cambio transformativo obligan a prestar atención a cinco aspectos:

- Las corrientes de conocimiento que alimentan las políticas;
- Los impactos sociales de la economía verde;
- La necesidad de emprender reformas institucionales y de gobernanza diversas y profundas;
- El papel de la política social;
- La generación de un entorno facilitador de la ciudadanía activa.

Aprovechar las diversas corrientes de conocimiento

Los enfoques predominantes sobre la economía verde deben su forma a determinados valores y corrientes de conocimiento, en detrimento de otras perspectivas que pueden tener puntos de vista y lecciones

sociales (por ingreso, grupo étnico y género), así como sobre los países a niveles muy diferentes de desarrollo. Para lograr esto con eficacia, se requiere de medidores e indicadores sociales y ecosociales, entre los que cabría destacar los siguientes: efectos distribucionales de los precios de la energía y los impuestos ecológicos sobre grupos de ingresos diferentes; los costos y los beneficios sociales de la reestructuración industrial, los empleos verdes y programas conexos de capacitación; normas sobre trabajo decente relacionadas con los empleos verdes; y repercusiones sobre la subsistencia y los derechos de las poblaciones rurales y las comunidades de la conservación basada en el mercado (PES, REDD), las políticas de crecimiento verde (agricultura orientada a la exportación, desarrollo de infraestructura a gran escala para la ordenación de los recursos hídricos), tecnologías verdes (biocombustibles, energía renovable) y otros esquemas de la economía verde.

Fortalecer las instituciones para el cambio conductual, estructural y equitativo

La promoción de una economía verde y justa pasa por reconocer la multiplicidad de instituciones sociales (normas, regulación, derechos, confianza y cooperación) y de relaciones sociales (clase, género, grupo étnico) que apuntalan la vulnerabilidad de las personas; la capacidad de los individuos, grupos y organizaciones para responder; y los posibles ganadores y perdedores de los procesos de cambio institucional y de política.

Los entes normativos tienen una responsabilidad fundamental en este sentido: a través de campañas de educación y sensibilización del público como la producción y el consumo cónsonos con el ambiente; la promoción de formas participativas de gobernanza en los procesos pertinentes de toma de decisiones; la descentralización y el fomento de la colaboración intersectorial; y las decisiones que adopten en materia de política social. Pueden diseñarse arreglos de gobernanza para facilitar la colaboración de múltiples actores (Estado, mercado, sociedad civil, comunidad) a distintos niveles (internacional, nacional, subnacional y local). El énfasis en las desigualdades y los desequilibrios de poder vinculados a la economía de mercado y el control corporativo destaca la necesidad de contar con una regulación eficaz y una rendición de cuentas en el sector corporativo, así como procedimientos para la compensación.

Hacia la adopción de políticas ecosociales

La política social tiene una función clave que cumplir en la promoción de una economía verde y justa. Las políticas pueden trascender el enfoque actual de compensar a los perdedores,

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_21007

